



Bono espera que Pérez Rubalcaba cumpla como diputado castellano-manchego

fue permitido a los 21 parlamentarios de la región -diputados y senadores- reunirse en las dependencias del grupo socialista para mostrar su apoyo a la política de **Bono** en el tema del agua. La reunión tuvo que celebrarse en un hotel cercano al Congreso.

"Nuestra voluntad -ha dicho el portavoz del Gobierno regional, **Emiliano García Page**, es no parar, sea cual sea la decisión del Consejo de Ministros.

No pararemos ni en el terreno de las iniciativas políticas, ni en el de la sensibilidad en la región".

Bono confía que, el único ministro de Castilla-La Mancha, el diputado toledano **Alfredo Pérez Rubalcaba** recuerde y se comprometa con la región que le dio su acta en el congreso.

Bono ha vuelto a reiterar su sorpresa por la postura de intransigencia adoptada por el Presidente de la Confederación

Hidrográfica del Tajo, un vasco con despacho en **Madrid**, que ha apoyado el trasvase porque se debe al ministro que le nombró. Castilla-la Mancha mantiene su petición de dimisión porque no está defendiendo los intereses del río Tajo. "¿Si el Tajo hablará?"

Los pueblos ribereños del Tajo en **Guadalajara** y **Cuenca**, y los que ven cruzar los canales del trasvase llenos de agua sino poder *tocar* una gota en **Albacete**, han sido los primeros en movilizarse en contra de nuevos trasvases.

●●● GUERRA ABIERTA

"Si el Gobierno atiende la petición de regadíos de árboles en la huerta de Murcia y Valencia y desatiende los abastecimientos a más de 150.000 personas en la región de Castilla-La Mancha, las consecuencias van a ser gravísimas", ha insistido, una y otra vez, durante las últimas semanas, **José Bono**, en **Madrid**.

Pero los poderosos *lobbys* murcianos y valencianos han conseguido, de momento, ganar la batalla de la *guerra del agua* en la opinión pública española, calificando la postura del gobierno regional de insolidaria y electoralista. **Bono**, que ha sido declarado *persona non grata* en algunos municipios murcianos, ha puesto, con su oposición -

hasta ahora poco fructífera en **Madrid**- en pie de guerra a los agricultores de **Murcia** y **Valencia**, y ha creado en el PSOE un nuevo *foco* de conflicto y división.

Joan Lerma, presidente de Valencia, y compañero de viaje en la etapa guerrista y renovadora de **Bono**, ha cuestionado la postura de Castilla-La Mancha y ha afirmado que sus huertas ya han perdido cultivos herbáceos y más de 900.000 jornales, aunque reconoció la situación de escasez de agua que sufrían los castellano-manchegos.

Más intransigente ha sido la presidenta murciana, la guerrista, **María Antonia Martínez**, que ha dado por hecho que el consumo de agua en la región está garantizado y ha criticado a **Bono** por decir que el abastecimiento a poblaciones es prioritario al de los regadíos.

"Un nuevo trasvase pone, punto y final, al Plan Hidrológico Nacional, porque serán muchos los que empiecen a pensar que el plan es un reclamo meramente dialéctico o electoral, pero que falla en su filosofía y en su realización porque su objetivo es trasvasar agua de donde sobra a donde falta", ha sostenido el gobierno regional.

La *guerra del agua* no ha hecho más que empezar. Durante más de una década seca e hidrológicamente muy mala la cuenca del Tajo ha trasvasado más de 3.800 millones de litros de agua y no ha conseguido recuperar el equilibrio hidrológico. Mantener los trasvases, es a juicio del Gobierno regional, un serio peligro para el abastecimiento y para la cuenca

●●● PULSO A BORRELL

La movilización regional obligó a **José Borrell**, Ministro de Obras Públicas, a suspender su viaje a **Talavera**, una de las ciudades ribereñas del Tajo, para inaugurar la nueva conducción de agua desde la presa de **Cazalegas** a la presa de **Portiña**. **Bono** había dado instrucciones a los dirigentes políticos de su partido, el mismo que el del ministro, para no acudir al acto. Hasta ahora **Borrell** se ha mostrado más partidario de los trasvases que de las res-



El río Tajo tiene el caudal más baja de los últimos años. El atropello ecológico al río no ha sido aún valorado por el Gobierno central